Es necesaria la convergencia entre el “Pacto Histórico” y la “Coalición de la Esperanza”

Imprimir

Colombia vive una situación que permite prever para las elecciones de 2022 de Presidente y de Congreso que podría darse un cambio de profunda repercusión política al ser posible la elección con respaldo en una amplia convergencia democrática de presidente que encabece un Gobierno Nacional que aplique un programa de transformaciones progresistas y de un Congreso con un cambio importante en su composición que haga posible adoptar reformas democráticas en consecuencia.
Han sido dos décadas de hegemonía del proyecto político uribista -de extrema derecha- en las cuales eligió gobiernos con políticas a favor de las élites tradicionales y emergentes, las medidas neoliberales, la promoción de la guerra y el autoritarismo ante la oposición política, los movimientos y sociales y las corrientes de opinión progresista. Pero en los años recientes y al presente ha entrado en crisis, crecen el desprestigio y el rechazo ciudadano frente al expresidente Álvaro Uribe, su partido Centro Democrático y su actual gobierno del presidente Iván Duque.

En contraste, las vertientes políticas de izquierda y progresistas que han estado en oposición al uribismo y al actual gobierno se fortalecen con el desarrollo de las acciones de control político, la defensa de las garantías constitucionales y de la implementación del Acuerdo de Paz conseguido entre el Estado y las FARC durante el anterior gobierno que lo logró distanciándose del uribismo. Estas vertientes de manera general coinciden y se solidarizan con las exigencias de derechos y garantías, reformas sociales y defensa de la vida, los derechos humanos, los territorios y el medio ambiente que enarbolan las protestas sociales y ciudadanas que han conseguido un inusitado e histórico auge en los últimos años y en el desarrollo del Paro Nacional de éste año.

En estas circunstancias, se abre la posibilidad de un nuevo proceso político en el país, de forma que cese la hegemonía del uribismo y se logren desde un gobierno progresista y con un Congreso favorable a los cambios en este sentido, que permitan el desarrollo de políticas y de reformas en lo político, lo social y lo ambiental, saliendo al paso a la profunda crisis existente en distintos órdenes. Hacia este propósito juegan como referentes centrales:

- El liderazgo nacional indiscutible con inmensa recepción en el ámbito popular de Gustavo Petro líder de la Colombia Humana y otros varios importantes liderazgos consolidados desde los partidos de oposición y desde las vertientes democráticas que han surgido recientemente.
- La consolidación en las últimas décadas de caracterizados, incidentes y dinámicos movimientos sociales y ciudadanos diversos de gran importancia a distinto nivel.
- Y el surgimiento reciente de dos procesos de convergencia política, social y ciudadana en el espectro de las corrientes de izquierda y democráticas: el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. La aproximación política, programática y de actuación unitaria entre estos dos proyectos constituye una condición necesaria y determinante hacia el éxito de esta perspectiva de cambio democrático progresista en Colombia.
  Crisis del uribismo: de su líder, su partido y su gobierno

  Se evidencia la crisis del uribismo que tuvo su ascenso con la bandera de la guerra para derrotar militarmente a las guerrillas insurgentes y que apuntaló un proyecto elitista de convergencia entre parte de la élite tradicional y de la élite emergente devenida del impacto a todo nivel de las mafias del narco-paramilitarismo. Su recurso fue profundizar el neoliberalismo, atizar la confrontación bélica y recurrir al autoritarismo y la intolerancia. Todas las encuestas revelan las tendencias crecientes a la desaprobación del respaldo al expresidente Álvaro Uribe, a su partido Centro Democrático y a su gobierno del actual presidente Iván Duque. En el último reporte de la firma Invamer ratifica estas tendencias, muestra que para septiembre de 2021 el expresidente Uribe tenía desaprobación del 68% y aprobación del 25% y el presidente Duque tenía desaprobación del 75% y aprobación del 20%[1].

  De tal forma, Álvaro Uribe, el partido Centro Democrático y el presidente Iván Duque afrontan una marcada crisis de credibilidad y legitimidad, producto de sus políticas y formas de gobierno, orientadas en favor de los monopolios del poder, el detrimento de los derechos del conjunto de la población y con marcadas prácticas de clientelismo, nepotismo y corrupción. El gobierno en la actualidad de manera arbitraria rompió con el equilibrio de los poderes públicos al cooptar los órganos de control y parte de los entes de la justicia y al

atentar contra la independencia del legislativo. Suprimió el proceso de transición iniciado por el anterior gobierno con la fuerza pública a tono con el contexto de transición de paz, de forma que regresa a actuaciones arbitrarias y violentas asociadas a graves violaciones de los derechos humanos, evidenciada al momento en la cruenta represión contra las recientes protestas sociales.

Álvaro Uribe se encuentra ahora acosado tanto por el creciente repudio popular como por una acción judicial en su contra que en medio de la impunidad predominante logró prosperar en la Corte Suprema de Justicia, de forma que tras haber realizado una juiciosa investigación le imputa varios delitos que resultan ser la punta del iceberg con relación a los numerosos y graves delitos asociados a sus prácticas caracterizadas por la arbitrariedad, la violencia y la corrupción.

Por su parte, los partidos tradicionales de derecha que han sido funcionales al uribismo y ayudaron a elegir al presidente Duque también sufren desgaste y pérdida de respaldo popular. El Partido Conservador que se ha plegado al uribismo desde sus anteriores gobiernos, cuenta con cuotas burocráticas y beneficios oficiales y se encuentra desperfilado y sin iniciativa. El Partido Liberal se ha debatido entre el uribismo y la independencia, de forma que paga el costo político por lo primero y sufre escisiones de sectores democráticos que se diferencian a su seno y llegan a protagonizar rupturas desde posiciones y proyectos democráticos. Y desde las dos disidencias transitorias: Cambio Radical debilitado subsiste disputando con las otras vertientes del uribismo los favores de las incorporaciones o alianzas con sectores políticos relacionados con las mafias emergentes. Mientras que la U, de haber servido en anterior momento al proyecto uribista tiende a desaparecer, pero de forma que también a su seno se diferencian algunos sectores progresistas que producen rupturas asumiendo proyectos democráticos.

Esta situación lleva a que en el ámbito político sea opinión generalizada considerar que el uribismo ya no puede imponer la elección del presidente, como lo hizo en las dos décadas anteriores. De forma que como vertiente de extrema derecha busca establecer una coalición con vertientes de derecha, sin capacidad de imponer una figura propia sino en respaldo a

otra, aún no encontrada. Quizás ante las nuevas circunstancias y con el desgaste político y de opinión sufrido, podría incluso aceptar que la candidatura presidencial tenga un tono de cierta moderación en la aplicación del modelo neoliberal, en el rechazo a la paz y hasta podría tolerar cierta distancia o tratamiento con algún escrúpulo que hagan el candidato y algunos aliados con sus integrantes y aliados asociados a vertientes políticas derivadas o apoyadas por las mafias del narco-paramilitarismo emergente. Algunos/as exalcaldes o exgobernadores de territorios importantes compiten al momento por proyectarse como la figura requerida y el liberalismo intenta encontrarla tentando a un exministro que habiendo pertenecido integralmente al establecimiento y a sus políticas ha tenido algunas posiciones de consecuencia doctrinaria liberal.

Crisis del modelo neoliberal y explosión de protestas populares en demanda de cambios

La profunda crisis social existente, acentuada gravemente por los efectos devastadores de la pandemia, expresa de fondo que se agotó el modelo económico neoliberal que impuso las políticas de precarización laboral y social y de renuncia del Estado a su deber de protección y garantía para con los derechos humanos y sociales fundamentales, tanto en el contexto internacional como en el interno.

Situación que explica el ascenso de las luchas sociales durante los últimos gobiernos con las mingas indígenas en defensa de sus tierras, territorios, autonomía y exigencia de garantías para sus planes de vida; el movimiento estudiantil contra la privatización y desfinanciación de la educación pública; las movilizaciones sindicales en defensa de las condiciones de trabajo ante la precarización y del rescate de derechos y garantías laborales y prestacionales; y diversas protestas populares locales y regionales asociadas a las demandas de acceso a derechos y servicios públicos, casos recientes de paros como los de Quibdó y Buenaventura. Habitantes en condición de pobreza, redes de mujeres en lucha contra la discriminación y la desigualdad y la juventud, han sido protagonistas de primera fila en estas protestas. Y, en defensa de los territorios, el medio ambiente y la naturaleza también se ha gestado un fuerte movimiento ambientalista con expresiones locales y regionales fuertes, con casos a destacar como el reciente de la defensa del Páramo de Santurbán, entre

Santander y Norte de Santander.

Estas protestas sociales del ámbito popular y democrático derivaron en el fuerte Paro Nacional de noviembre de 2019 (21N), retomado con inusitada fuerza el presente año por parte del Comité Nacional del Paro y por diversos sectores sociales movilizados, que desde abril (28A) por dos meses llegaron protagonizar inmensas movilizaciones e intensas formas de resistencia civil, con especial participación de la juventud, ante la arbitraria y violenta represión gubernamental aplicada. Este movimiento derrotó los proyectos gubernamentales de reforma tributaria y de reforma a la salud –neoliberales-, tumbó varios ministros y puso al centro de la agenda nacional la demanda de reivindicaciones y reformas sociales progresistas.

Conformación del Pacto Histórico

El Pacto Histórico es un proyecto de convergencia político-social que se estructura a nivel nacional, de forma que han concurrido cinco partidos políticos con representación en el Congreso, varios congresistas de partidos políticos independientes y una veintena de agrupaciones políticas o político sociales o sociales con importantes presencias nacionales, sectoriales o regionales.

Los partidos del Pacto Histórico son: Colombia Humana (CH) presidida por el senador Gustavo Petro, a la cual el Consejo Nacional Electoral le negó en 2018 la solicitud de personería jurídica, por lo cual reclamó tutela siendo igualmente negada en primera y segunda instancia, pero la Corte Constitucional falló el mes pasado a su favor. El Polo Democrático Independiente (PDA) de importante representación parlamentaria y con liderazgos destacados como los de los senadores Iván Cepeda, Alexander López y Wilson Arias. La Unión Patriótica (UP) presidido por la valiosa senadora Aída Abella. El Movimiento Alternativo Indígena Social (MAIS) presidido por el destacado líder indígena nasa y senador Feliciano Valencia. Y el partido Alianza Democrática Amplia (ADA), presidido por el líder afro Paulino Riascos. Se han integrado también al Pacto Histórico los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti quienes salieron del partido la U. Así mismo, el senador del Partido Liberal Luis

Fernando Velasco y otros integrantes de este partido se han aproximado a los propósitos y actividades de ésta convergencia.

Así mismo, los siguientes movimientos políticos o político sociales y ambientalistas se han integrado al Pacto Histórico: Fuerza Ciudadana liderado por Carlos Caicedo actual gobernador del Magdalena, Todos Somos Colombia liderado por Clara López, la Fuerza de la Paz liderada por el senador Roy Barreras, Soy porque Somos presidido por la lideresa afro Francia Márquez, Partido Comunista Colombiano, Comunes conformado por personas firmantes del acuerdo de paz con la ex insurgencia FARC, Marcha Patriótica, Partido del Trabajo de Colombia (PTC), Unidad Democrática (UD), Congreso de los Pueblos, Poder Ciudadano liderado por la exsenadora Piedad Córdoba, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP), Coordinadora Socialista, Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), Alianza, Movimiento por el Agua y por la Vida, Ciudadanías Libres y Sí Podemos. También se registran otras agrupaciones políticas o político sociales del orden regional o local que se han integrado en distintas regiones o departamentos.

El Pacto Histórico propone una amplia convergencia política y social con propósito mediato de conseguir un gobierno democrático y un cambio en la composición de fuerzas en el Congreso que haga posibles las reformas. Se concibe como un proceso en construcción, de forma que hace un mes realizó un seminario nacional para avanzar en la definición de líneas programáticas que hacen referencia a: Reformas políticas, del sistema electoral, sociales con énfasis en salud y educación, laboral; en defensa de lo público y en combate a la corrupción; en favor del ambiente con demanda de cambio en el modelo económico para dar lugar a la transición de la energía de fuente fósil a energías limpias; y con relación a la recuperación y diversificación de posibilidades productivas, recuperación de la soberanía alimentaria y de los derechos humanos en sentido integral, así como el diseño de una reforma fiscal sobre el principio de progresividad.

En sus pronunciamientos habla de establecer pactos de amplio consenso por el trabajo, la productividad, los derechos sociales, la vida digna, las garantías ciudadanas, con la naturaleza, por la democracia y por la paz. Destaca la exigencia de aplicación efectiva de las

garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de 1991, el cumplimiento integral del acuerdo de paz con las FARC, el logro de una paz completa y la defensa de la sociedad y sus expresiones sociales, poblacionales y ciudadanas con un sentido plural, de no discriminación y de reconocimiento de la diversidad cultural, los pueblos y comunidades étnicas, los derechos de las mujeres en rechazo al patriarcalismo, los derechos de la población LGTBIQ+, entre otros elementos importantes.

Para las elecciones al Congreso el Pacto Histórico presentará una lista cerrada concertada con participación igualitaria de mujeres y hombres al Senado y trabaja en la definición de listas cerradas o abiertas a la Cámara, a la vez que realizará en la misma fecha una consulta entre las candidaturas de ésta coalición para la presidencia, entre las que están las de Gustavo Petro de Colombia Humana, Roy Barreras de Fuerza de La Paz, Francia Márquez de Soy porque Somos y Arelis Uriana líder indígena Wayuú de MAIS, de forma que con base en sus resultados definirá las candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia. El movimiento Fuerza Ciudadana no compartió hacer parte de la lista cerrada al Senado, por lo cual lidera una lista alterna abierta, con sus candidatos y con candidatura de otros movimientos regionales como el caso de Sí Podemos.

Gustavo Petro junto con otros liderazgos del Pacto Histórico inició en los últimos dos meses una gira de campaña que, de nuevo, al igual que en 2018, colma de multitudes entusiastas las plazas públicas, generando una movilización política ciudadana en favor de este proyecto político y sus propósitos. Así, ha realizado concentraciones en Barranquilla, Valledupar, Popayán, Pasto, Cali y Bogotá. En estos lugares y a nivel nacional ha presentado las siguientes doce propuestas programáticas con determinados contenidos y propuestas que se difunden con amplitud:

1. Salud para la vida y no para el negocio
2. Educación gratuita y de calidad
3. Corruptos a la cárcel
4. Tierra y crédito para la gente
5. Justicia independiente y libre de politiquería

6. Energías limpias para el futuro
7. Seguridad en una era de paz
8. Poder para el pueblo
9. Pensiones justas
10. Reindustrialización del país
11. Economía para la vida
12. Techo para todos

Surgimiento de la Coalición de la Esperanza

La Coalición de la Esperanza está conformada por liderazgos reconocidos de siete vertientes políticas, algunas de reciente conformación, entre ellas cuatro partidos políticos con personería jurídica y representación en el Congreso y otras tres son agrupaciones políticas. Los partidos son: Alianza Verde (PAV) con la presidencia colegiada de Antonio Navarro, Antanas Mockus y Carlos Ramón Gonzáles; la Alianza Social Independiente (ASI) presidida por Berenice Bedoya; el movimiento político Dignidad presidido por el senador Jorge Robledo y por Juan Manuel Ospina; y el Nuevo Liberalismo presidido por Juan Manuel Galán, el cual obtuvo mediante fallo de la Corte Constitucional personería jurídica el pasado mes de agosto. Y las agrupaciones políticas son: Convergencia Ciudadana presidida por el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo; En Marcha presidida por el exsenador y exministro Juan Fernando Cristo, escindida en 2018 del Partido Liberal; y un sector del liberalismo presidido por Humberto de la Calle, exvicepresidente, exministro y exjefe negociador por el gobierno nacional de la época del Acuerdo de Paz con las FARC.

Tras frecuentes reuniones de trabajo las dirigencias de la Coalición de la Esperanza han definido un conjunto de Principios Programáticos y Éticos que subrayan “recuperar la confianza en la democracia, poner la economía al servicio de la ciudadanía, proteger la biodiversidad y proteger la ciudadanía y los territorios”. Proclaman la necesidad de lograr un cambio democrático y progresista en el país, con base en un gran movimiento, que se distancie de “posiciones extremas”, destaque lo colectivo por encima de la dirigencia de tipo personal y supere la degradación de la política que se encuentra afianzada en los partidos y vertientes tradicionales.

Uno de sus dirigentes, Juan Fernando Cristo, refiere en los siguientes términos el llamado a consolidar este proyecto político bajo tal tipo de principios, de compromisos concertados y de propuestas programáticas y de acción democráticas, de atención social y en perspectiva de consolidar la paz: “Las puertas están abiertas para otros sectores. Pero la Coalición tiene un ADN: es de oposición, de cambio, de liderazgo colectivo, no es de mesías y caudillos, y está alejada de extremos y de partidos tradicionales, que además vienen acompañando al gobierno de Iván Duque”[2].

La Coalición de la Esperanza acordó concertar una lista unificada al Senado y listas de convergencia a la Cámara y el mismo día de las elecciones parlamentarias realizar una consulta para elegir su fórmula presidencial y vicepresidencial, con base en las precandidaturas existentes, expresadas en los liderazgos de sus partidos y agrupaciones: Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo y la precandidatura que logre concertar a su seno el PAV. Éste partido, el principal de esta coalición por su fuerza en el Congreso y en gobiernos territoriales, ha tenido mucha dificultad y contradicciones en la definición de mecanismos y avance en la escogencia de su fórmula de candidatura presidencial, de forma que incluso una de las vertientes a su seno propone realizar una convergencia en esta consulta con la que tiene también prevista el Pacto Histórico, a la vez que algunas voces a su seno han llegado a plantear acordar la libertad de votación en las consultas para su militancia e incluso se llega a hablar de una posible escisión política a su seno si no se logran dirimir diferencias sobre el tema de las candidaturas a presidencia y vicepresidencia y la forma y aliados o participantes para hacerla.

Necesidad de los acuerdos unitarios Pacto Histórico-Coalición de la Esperanza

En particular el precandidato presidencial del PAV Camilo Romero propuso acordar una sola consulta unificada para definir una candidatura presidencial/vicepresidencial única entre las coaliciones Pacto Histórico y La Esperanza, en la fecha prevista de las elecciones presidenciales del 13 de marzo de 2022, con base en un programa y una agenda concertadas. Esta propuesta fue apoyada por uno de los copresidentes de ese partido, Carlos

Ramón González y por ocho de sus congresistas. Posteriormente fue difundido un mensaje conjunto de integrantes de la coalición Pacto Histórico y parte de los integrantes del PAV que integra la Coalición de la Esperanza, en el cual expresaron un llamado a conseguir la unidad entre estas dos coaliciones de vertientes de izquierda y del centro democrático o progresista.

En respuesta a estos pronunciamientos en una carta pública, el pasado 16 de septiembre, los copresidentes del PAV Antonio Navarro y Antanas Mockus expresaron que resultaba inconveniente, en su opinión, conseguir en la actualidad el acercamiento y acuerdos entre el Pacto Histórico y la Coalición de La Esperanza, mientras que el otro copresidente, Carlos Ramón Gonzáles se abstuvo de suscribirla. En su argumentación plantearon que el propósito de la Coalición La Esperanza es “unir al centro y la centro-izquierda”, que no implicaría una coalición con el Pacto Histórico al considerarlo “alianza de pensamiento de izquierda”, por lo cual concluyen que “poco nuevo aportaríamos sumándonos a ella”.

Es de destacar que ambas convergencias coinciden en sus lineamientos básicos que pueden dar lugar a concertar el programa de gobierno democrático progresista comprometido con la construcción de la paz, los reclamos de derechos sociales de la población, la defensa de los postulados constitucionales garantistas y de los derechos humanos, las respuestas necesarias ante la crisis social y la crisis ambiental registradas y los presupuestos civilistas, democráticos y éticos que requiere la renovación de la política. En el espectro del Pacto Histórico convergen casi todo el grueso de las vertientes de izquierda, diversos movimientos sociales y poblacionales y varias significativas figuras democráticas y del centro progresista. En la Coalición de la Esperanza convergen ante todo partidos y agrupaciones del centro progresista y democrático, con participación a su seno de algunas expresiones importantes de la izquierda. La unidad entre los proyectos resulta ser una complementación necesaria que potenciaría las posibilidades en juego.

Por supuesto que un proceso de acuerdos y definición de acciones entre estas dos convergencias es difícil, complejo y trae resistencias y debates. Forzar tal tipo de proceso sería un error, pero negarlo o asumir posiciones sectarias o de confrontación entre ellos sería una indeseable e incomprensible tragedia política para los justos deseos de unidad

reclamada en amplios y diversos sectores de la ciudadanía. Deseable, ideal, sería la unificación de la consulta para la definición de la fórmula de la candidatura a presidencia/vicepresidencia en las elecciones de marzo de 2022, se abriría la posibilidad del triunfo unificado en primera vuelta y se evitaría el riesgo de una unificación entre las derechas y las extremas derechas incluso también en primera vuelta para abortar el cambio por el que luchan estas dos coaliciones progresistas. De no lograrse, resulta recomendable, realmente imperioso, buscar todos los entendimientos y acuerdos posibles entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza.

Si bien positivamente el Pacto Histórico -como ya sucedía con Colombia Humana- registra en las encuestas como el partido más reconocido, Gustavo Petro sigue con ventaja liderando todas las encuestas hacia presidencia y Sergio Fajardo aparece en segundo lugar con importante reconocimiento, en ambas coaliciones hay conciencia en que existe de manera general una crisis de representación y de desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y hacia la propia política, de forma que alrededor del 70% de la ciudadanía en las mismas encuestas no se alindera con ninguno y no se considera ni de derecha ni de izquierda.

En todo caso, por lo expuesto, es claro entender que el momento histórico exige una gran responsabilidad y una gran capacidad para obrar con acierto. Sólo la más sólida unidad y convergencia de todo el espectro democrático progresista, político, social y de ciudadanías diversas podrá derrotar de manera efectiva el regresivo proyecto uribista en crisis. Colombia no puede ser la excepción en Nuestra América, donde en numerosos países en las dos décadas recientes se abre paso una ola de gobiernos progresistas en busca de las transformaciones democráticas requeridas. El presidente Duque y su ministro del interior, con clara participación en política de forma indebida, han hecho recientes expresiones de expreso rechazo a la candidatura de Gustavo Petro y a los proyectos del espectro democrático, dicen: “si gana las elecciones es un peligro para la democracia”, “sería un desastre”. Tienen temor ante la evidencia de la crisis de su proyecto y desesperadamente tratan de evitar el cambio. Pero es de esperar en este panorama el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza logren compaginar una acción de proyección política que sintonice

con el extendido inconformismo ciudadano y con la inmensa movilización popular gestada, de forma que abran paso a la página histórica del cambio democrático en Colombia.

_____

[1] “Encuesta Invamer: aumenta la desaprobación del presidente Iván Duque”, Noticias AS Actualidad, 2 de septiembre de 2021. https://colombia.as.com/colombia/2021/09/03/actualidad/1630621462_826873.html

[2] “No queremos que nos reelijan un Duque en cuerpo ajeno”, entrevista de Javier González Penagos a Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, El Espectador, 30 de septiembre de 2021, página 8.

Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática